

21ª SESION ORDINARIA DEL 12 DE JULIO DE 1858

Presidencia del Sr. Ferreira

PRESIDENTE

ARAOZ

SORIA

LOPEZ (D. TIBURCIO)

GARZON

RODRIGUEZ

GRAZ

FEIJOO

VALLE

GORDILLO (D. J.)

OCAMPO

DURAN

LOPEZ (D. RICARDO)

LUCERO

PARDO

GONZALEZ

En el Paraná, Capital Provisoria de la Confederacion Argentina, á doce dias del mes de Julio de 1858, reunidos en su Sala de sesiones los Sres. Diputados anotados al márgen, con inasistencia de los Sres. Luque, Condarco, Gordillo (D. Vicente) Victorica y lomas con aviso, el señor Presidente declaró abierta la sesion y se leyeron sucesivamente las actas

QUESADA

COLODRERO

NAVARRO (D. R. G.)

PUNES

POSSE (D. FLEMON)

CHENAUT

WARCALDE

GARCIA

POSSE (D. JUSTINIANO)

GUTIERREZ

ALVEAR

de las sesiones del 5 y 7 del corriente, que fueron aprobadas.

Despues de esto, el señor Colodrero pidió la palabra y dijo, que sin perjuicio de la discusion de la orden del dia iba á hacer una mocion para que se llamase al señor Ministro de Relaciones Ex-

teriores, al objeto de que se sirviese dar algunas explicaciones sobre los motivos que hubiese tenido el Gobierno para permitir hasta la fecha la estacion de una

fuerza paraguaya situada en la Tranquera de Loreto, territorio de Corrientes, sin embargo de que el de esta Provincia habia hecho reiteradas veces algunas reclamaciones al Gobierno Nacional para que éste pidiese al del Paraguay el retiro de esas fuerzas.

Que últimamente habia visto (el señor Diputado) en un periódico de Corrientes una nota del Gobierno de la provincia en que repetia esas reclamaciones, y era por esta razon, que deseaba se llamase al señor Ministro de Relaciones Exteriores para que se sirviese dar las explicaciones que habia indicado.

Apoyada suficientemente esta mocion, el señor Presidente expuso, que se pondria en discusion tan luego de aprobarse las actas de las sesiones del 30 del próximo pasado y 1º del presente, cuya lectura iba á hacerse.

El señor Colodrero hizo mocion entonces para que se excusase la lectura de aquellas por ser demasiado largas y se diesen por aprobadas. Apoyada la mocion, la Honorable Cámara desirrió á ella.

Inmediatamente se procedió á dar cuenta de los siguientes asuntos entrados en Secretaría.

1º Un mensaje del Excmo. señor Presidente de la Confederacion á que adjuntaba un proyecto de ley en que se autorizaba al Poder Ejecutivo para donar al caballero don José de Buschenthal diez leguas cuadradas de terreno de propiedad nacional como un testimonio del reconocimiento del Gobierno por los servicios que dicho señor le ha prestado en las Córtes del Brasil y Nápoles. Pasaron estos documentos á la Comision de Peticiones y Negocios Extranjeros.

2º Una nota del señor Presidente del Honorable Senado, á que adjuntaba en revision un proyecto de ley en que se dispone se construya un puente con sus correspondientes calzadas en el Río Gualeguay.

Pasaron estos documentos á la Comision de Hacienda.

3º Otra nota del mismo señor Presidente á que acompañaba en revision un proyecto de ley aprobatoria de la Convencion fluvial, celebrada con S. M. el Emperador del Brasil, adjuntándose tambien dicha convencion y el mensaje en que el Poder Ejecutivo solicita su aprobacion.

Pasaron estos documentos á la Comision de Negocios Extranjeros.

4º Otra nota del mismo señor Presidente en que trasmitia á la Honorable Cámara que la de Senadores habia tomado en consideracion, en sesion del 10 del corriente, el proyecto de ley que se le pasó en revision determinando la forma en que el Congreso debia contestar al discurso de apertura del Presidente de la Confederacion y habia tenido á bien

modificarlo en los términos que aparecian del adjunto.

Pasó esta nota con el proyecto adjunto á la Comision de Legislacion y Negocios Constitucionales.

Dióse tambien cuenta de haber presentado don Pedro Díaz Rodriguez el diploma que le acredita en el carácter de Diputado suplente electo por la Provincia de Santiago, y pasó dicho diploma á la misma comision.

Acto contínuo, el Dr. don José M.^a Zuviara, cuyo diploma se habia aprobado en la sesion anterior, prestó el juramento de ley y entró en el ejercicio de sus funciones.

Se puso en discusion la mocion hecha por el señor Diputado Colodrero.

El señor Navarro expuso, que votaria en favor de ella, si se habia hecho en el concepto de dar al señor Ministro el tiempo suficiente para prepararse á transmitir las explicaciones que se deseaban, como se acostunbraba hacerlo en casos semejantes.

El señor Colodrero, que en ese sentido habia hecho la mocion y que podia llamársele al señor Ministro para la sesion próxima, y desiriendo la Honorable Cámara al efecto, el señor Presidente expuso que se pasaria á considerar la órden del dia.

El señor Warcalde propuso se hiciese un cuarto intermedio al objeto de que la Comision se expidiese respecto al diploma presentado por el señor Díaz Rodriguez. Aceptada por la Honorable Cámara esta mocion, se pasó á cuarto intermedio.

Vueltos los señores Diputados á sus asientos, se leyó el siguiente dictámen:

Honorable Señor:

Vuestra Comision de Legislacion y Negocios Constitucionales, ha examinado el diploma que ha presentado don Pedro Díaz Rodriguez como Diputado Suplente electo por la Provincia de Santiago, y tiene el honor de aconsejaros el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 1º Hágase por bastante el diploma que ha presentado el señor don Pedro Díaz Rodriguez, que lo acredita en el carácter de Diputado Suplente, electo por la Provincia de Santiago.

Art. 2º Comuníquese y archívese.

Sala de Comisiones, Paraná, Julio 12 de 1858.

Filemon Posse.—Ramon G. Navarro.

—Pedro Antonio Pardo.—Emiliano

García.—Quintín Valle.

Puesto sucesivamente á discusion en general y particular este proyecto, no se hizo observacion á él y fué aprobado por unanimidad.

El señor Díaz Rodriguez prestó el juramento de ley y entró en el ejercicio de sus funciones.

Se pasó á considerar la órden del dia: su tenor es el siguiente:

Honorable Señor:

La Comision de Justicia, Culto é Instruccion Pública ha considerado con la detencion que requiere la importancia del asunto, el proyecto de ley pasado en revision por la Honorable Cámara de Senadores, y tiene la honra de aconsejar á Vuestra Honorabilidad su adopcion con las modificaciones que contiene en la forma que presenta.

Las alteraciones que ha creido conveniente hacer, son varias y se notan fácilmente por el examen comparativo de la Sancion del Honorable Senado.—El Diputado Funes miembro informante expondrá en el debate las razones que han obrado en el juicio de la Comision.

Sala de Comisiones, Paraná Julio 1° de 1858.

*Avelino Ferreyra.—Benjamin Victorica.—Pedro L. Funes.
—Genaro Feijoo.—Severo So-
ria.*

El Senado y Cámara de Diputados de la Confederacion Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de Ley.

CAPITULO I.

DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES DE LA JUSTICIA FEDERAL.

Artículo 1° La Justicia Federal será ejercida en todo el territorio de la Confederacion por la Suprema Corte de Justicia, y por los Tribunales inferiores que establece esta ley y los que en adelante estableciere el Congreso.

Art. 2° Los Tribunales Federales procederán siempre con arreglo á la Constitucion y á las leyes nacionales que estén en conformidad con ella.

Art. 3° El primordial objeto de la Justicia Federal es mantener en vigor y en observancia la Constitucion Nacional en los casos contenciosos que ocurran, interpretando en ellos las leyes uniformemente y aplicándolas conforme á la Constitucion, y no de otra suerte.

Art. 4° Corresponde á la Justicia el conocimiento y decision de todas las causas que se hallen comprendidas en el artículo 97 de la Constitucion Nacional.

Art. 5° La Justicia Federal excluye á la de la Provincia en los casos, en que aquella tiene por la ley, una jurisdiccion originaria.—En los demás casos ejerce una jurisdiccion concurrente con la de la Provincia, pero solo en grado de apelacion ó enmienda. Mas en las causas que se susciten entre vecinos de diferentes Provincias, no es excluida la Justicia de Provincia si los de extraña prorroganse su jurisdiccion aceptándola.

Art. 6° La Justicia comun de Provincia excluye á la Federal en los casos en que no se interesa la Constitucion en ninguna ley nacional; pero no la excluirá cuando sea llamada la Federal á juzgar entre vecinos de diferentes Provincias, debiendo entonces decidir con arreglo á las leyes provinciales correspondientes.

Art. 7° La Justicia Federal jamás procede de oficio ni puede ejercer su jurisdiccion, sino en los casos contenciosos en que es requerida á instancia de parte.

Art. 8° El Poder Ejecutivo Nacional prestará la fuerza necesaria á la ejecucion de las sentencias de la Justicia Federal en todo el Territorio de la Confederacion.

Art. 9° En los casos en que fuesen parte individuos, corporaciones, Provincias y la misma Confederacion, se reputarán como un solo individuo para la administracion de la Justicia Federal ante los Tribunales.

Art. 10. La Justicia Federal es independiente en el ejercicio de sus funciones de todo otro poder, sea Nacional ó Provincial.

Art. 11. La accion de la Justicia Federal es extensiva á las atribuciones del Poder Legislativo, de suerte que en cuanto éste puede legislar podrá juzgar aquélla.

CAPITULO II.

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Art. 12. La Suprema Corte de Justicia será ejercida por un Tribunal compuesto de nueve Jueces y dos Fiscales que residan en la capital conforme al artículo 91 de la Constitucion.

Art. 13. La Corte Suprema nombrará su Presidente por el tiempo y segun lo establezca su reglamento interior.

Art. 14. Corresponde á la Suprema Corte de Justicia, originaria y exclusivamente, el conocimiento y decision de las causas concernientes á Embajadores, Ministros y Cónsules Extranjeros; en las que una Provincia fuese parte, y en los conflictos entre los Poderes públicos de una misma provincia.

Art. 15. Corresponden á la Suprema Corte de Justicia en grado de apelacion ó enmienda las demás causas de la jurisdiccion Federal que viniesen ante ella de los Tribunales inferiores federales, conforme al orden establecido en esta ley, y las que vengan de los Tribunales Superiores de Provincia.

Art. 16. La Corte Suprema de Justicia conoce exclusivamente en las causas referentes á la conducta ministerial de sus miembros y de los de las Cortes de Distrito.—Conoce tambien de las de sus empleados subalternos, á quienes nombra y remueve segun su reglamento interior.

Art. 17. Los fallos de la Suprema Corte de Justicia son irrevocables y sin apelacion. Ningun Poder Público Federal ni Provincial puede pretender derecho de revisar esos fallos ó oponerse á ellos, ni aun en los casos en que la Corte decidiese competencias con su propia jurisdiccion.

Art. 18. Lo establecido por el artículo anterior no se opone á la facultad acordada al Presidente de la Confederacion para indultar y conmutar penas conforme al artículo 33, inciso 6° de la Constitucion.

CAPITULO III.

DE LOS TRIBUNALES INFERIORES FEDERALES

Art. 19. Son Tribunales inferiores Federales las Cortes de distrito que establece esta ley en cada circunscripcion judicial y los Juzgados de seccion distritales en todo el Territorio de la Confederacion.

§ I.

DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE DISTRITO

Art. 20. El territorio de la Confederacion será distribuido en cinco Distritos ó circunscripciones judiciales, á saber:

1º Distrito del Este, que comprenderá las Provincias de Corrientes, Entre Rios y Santa-Fé.

2º Distrito del Centro, que comprenderá las Provincias de Córdoba, Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

3º Distrito del Oeste, que comprenderá las Provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.

4º Distrito del Norte, que comprenderá las Provincias de Tucuman, Salta y Jujuy

5º Distrito del Sud, que comprenderá las Provincias de Buenos Aires luego de incorporada.

Art. 21. En cada uno de estos Distritos habrá una Corte Federal de Justicia, cuyo asiento será como sigue:

La del Este en la Capital.

La del Centro en Córdoba.

La del Oeste en Mendoza.

La del Norte en Salta.

La del Sud en su Capital.

Art. 22. Las Cortes de Distrito serán compuestas de un Presidente, dos Vocales, un Fiscal y los empleados subalternos que determine su Reglamento interior; los que no podrán ausentarse del lugar de su destino sin permiso especial de la misma Corte.

Art. 23. Para Vocal de las Cortes de Distrito se requiere ser mayor de veinticinco años, ciudadano argentino y abogado de la Confederacion con seis años de ejercicio.

Art. 24. Corresponde á las Cortes de Distrito originariamente, el conocimiento y decision de las causas que versen sobre puntos regidos por los tratados con las naciones extranjeras; de las de almirantazgo y jurisdiccion marítima y de los recursos de fuerza.

Art. 25. En los demás asuntos regidos por la Constitucion y leyes nacionales, en los que la Confederacion sea parte y en los que se versen entre vecinos de diferentes Provincias, conocen y deciden las Cortes de Distrito en apelacion de los jueces Federales.

Art. 26. Las Cortes de Distrito conocen originariamente en las causas concernientes á la conducta ministerial de sus empleados subalternos y de los Jueces Federales de seccion y sus Fiscales.

Art. 27. Los fallos de estas Cortes son inapelables no excediendo su importancia de quinientos pesos excluidas las costas.

Art. 28. Las Cortes de Distrito nombrarán sus empleados subalternos y podrán removerlos con justa causa.

Art. 29. Los Vocales, el Fiscal y empleados subalternos de las Cortes de Distrito prestarán juramento ante el Presidente de la misma Corte para entrar en el ejercicio de sus funciones.

§ II

DE LOS JUZGADOS FEDERALES DE SECCION

Art. 30. Son Juzgados Federales de Seccion los de primera Instancia establecidos en el territorio federalizado y demás que se establecieren en las Provincias conforme á esta ley.

Art. 31. En cada Provincia que formará una ó más secciones judiciales, habrá uno ó más Juzgados Federales, compuestos de un Juez, un Fiscal y demás empleados que señala su reglamento interior.

Art. 32. Para ser Juez de Seccion se requiere ser mayor de veinticinco años, ciudadano argentino y abogado de la Confederacion con cuatro años de ejercicio.

Art. 33. Los Jueces del Territorio Federalizado ejercerán además de la jurisdiccion Federal en todos los casos que no esté atribuida originariamente á las Cortes de Distrito, la ordinaria de Provincia.

Art. 34. Los Jueces Federales de Seccion tienen jurisdiccion originaria en los casos en que la Confederacion sea parte y en las causas que se susciten entre vecinos de diferentes Provincias; conocen tambien en apelaciones de los jueces inferiores de la Provincia en los casos regidos por la Constitucion y leyes nacionales, siempre que no se prefiera el recurso al Juez ó Tribunal local Superior.

Art. 35. Los Juzgados Federales conocen y deciden de las causas concernientes á sus empleados subalternos en el desempeño de su oficio.

Art. 36. Los Jueces de Seccion no podrán ausentarse del territorio de su jurisdiccion por asuntos personales sin licencia de la respectiva Corte del Distrito, ni del lugar de su residencia sino á objeto del servicio público.

Art. 37. Los Jueces de Seccion prestarán juramento ante el Presidente de la Corte de Distrito, quien lo recibirá por sí ó por comision. El Fiscal y demás empleados subalternos del Juzgado lo prestarán ante el Juez.

CAPÍTULO IV

DE LOS JUECES FEDERALES

Art. 38. Los Jueces y Fiscales de la Corte Suprema, los Jueces y Fiscales de las Cortes de Distrito y los de Seccion, son inamovibles de su destino durante su buena comportacion.

Art. 39. Cuando los miembros de la Corte Suprema sean acusados con arreglo al artículo 41 de la Constitucion, quedarán suspenso desde que se pronuncie la declaratoria de haber lugar á formacion de causa segun el mismo artículo.

Art. 40. Los miembros de las Cortes de Distrito y los de los Juzgados de Seccion, solo podrán ser depuestos por sentencia, previo juicio legal, pero serán suspensos por el auto que declara haber lugar á proceso.

Art. 41. Los Jueces Federales y Fiscales de cualquier clase que sean no podrán aceptar ó retener empleo alguno de la Nacion ó de las Provincias, ni comi-

sion que pueda ser remunerada. En caso de aceptacion perderán el empleo que tenían.

CAPÍTULO V

DE LOS JUECES Y SUPLENTES

Art. 42. Cuando un impedimento cualquiera inhabilite á un Juez para ejercer su destino, el Gobierno nombrará un Suplente conforme al art. 83, inciso 5º de la Constitucion.

Art. 43. Cuando en alguna causa se hallen impedidos para conocer uno ó mas Jueces de la Corte Suprema, serán llamados por su orden para reemplazarlos el Presidente y Vocales de la Corte de Distrito de esta Capital, y en el caso que éstos estén tambien impedidos, los abogados residentes en la Capital por su orden de antigüedad.

Art. 44. Cuando uno ó dos Vocales de las Cortes de Distrito se hallen impedidos para el conocimiento de un asunto, se llamará para integrar al Tribunal por orden de antigüedad á los abogados matriculados en el lugar de la residencia de aquél.—En el caso de impedimiento de los tres Vocales, la causa pasará á la Corte de Distrito mas inmediata.

Art. 45. En los casos de hallarse impedido un Juez de Seccion por excusacion ó recusacion para conocer en algun asunto, la Corte de Distrito nombrará otro Juez para ese solo asunto.

Art. 46. Si quedase vacante un Juzgado por enfermedad ó ausencia justificada del Juez, que no exceda de tres meses, la Corte respectiva nombrará interinamente quien deba servir el juzgado; excediendo de tres meses se avisará al Gobierno para llenar la vacante de conformidad al art. 42.

Art. 47. Los sueldos de los suplentes que se nombraren en los casos de los artículos 42 y 46 serán pagados por el Tesoro Nacional.—El honorario de los abogados en los casos de los artículos 44 y 45, se pagará por las partes con arreglo á arancel; mas si el Vocal ó Juez impedido hubiese sido causa de su impedimento, pagará de su sola cuenta el honorario del que lo reemplaza.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 48. La Corte Suprema de Justicia dictará reglamentos para su régimen interior, para las Cortes de Distrito y Juzgados de Seccion; y comunicará al Poder Ejecutivo Nacional el programa de los empleados subalternos de la Instancia Federal para solicitar del Congreso la ley de su creacion y sueldos.

Art. 49. La Corte Suprema nombrará sus empleados subalternos respectivos.—Las Cortes de Distrito y Juzgados de Seccion propondrán los que les correspondan por conducto de la Suprema para que el Poder Ejecutivo los nombre.

Art. 50. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, Paraná, Julio 1º de 1858.

*Avelino Ferreyra—Severo Soria—
Pedro L. Funes—Benjamin Victorica—Genaro Feijoo.*

Se puso á discusion en general este proyecto.

El señor Funes como miembro informante expuso: Que la Comision de Justicia se habia ocupado con la detencion que requería la importancia de este asunto, de hacer un examen comparativo del proyecto pasado por el Ejecutivo con el sancionado por el Honorable Senado y pasado en revision á la Honorable Cámara, porque comprendía el rol que iba á desempeñar el Poder Judicial bajo el aspecto político. Que se limitaría, pues, á emitir algunas consideraciones para hacer notar la necesidad de que la Honorable Cámara sancionase cuanto antes este proyecto y las modificaciones que la comision habia hecho en el del Senado y el presentado por el Gobierno. Que los Tribunales Federales tales como se plantean en el proyecto eran una especialidad, desde que tenían un carácter político, en virtud del cual iban á funcionar como uno de los altos poderes del Estado, á diferencia del Poder Judicial de otros países que solo se ocupan en dirimir cuestiones entre particulares. Que decia que entre nosotros los Tribunales Federales iban á desempeñar un rol político, porque estaban encargados de conservar y defender la Constitucion, y decidir en las causas que versasen sobre tratados con las naciones extranjeras, de los conflictos entre los poderes públicos, nacionales y provinciales, en las causas concernientes á Embajadores, Ministros públicos y consulares, extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdiccion marítima, de los recursos de fuerza, y de todas aquellas en que la Confederacion sea parte; y finalmente que correspondia tambien á los Tribunales Federales contener los abusos de los demás poderes.

Que como no era difícil que una mayoría dominante en las Cámaras apoyase una medida injusta ó inconstitucional del Poder Ejecutivo,—ó que ellas por sí mismas, dictasen una medida de esta naturaleza apoyadas por aquel, la Constitucion habia creado un tercer poder, que por su naturaleza y atribuciones especiales, evitase ese grave mal, defendiendo los principios consignados en ella y las leyes generales; y era por eso, que aquella para garantizar la independencia de los Tribunales Federales solo establecia la inamovilidad de sus Jueces. Que la comision para alejar hasta la sospecha de dependencia respecto de ese poder destinado á desempeñar tan alta mision, y comprendiendo la necesidad é importancia de que pudiese funcionar libremente en la órbita de las atribuciones que la Constitucion le acuerda, se habia fijado en los artículos 42, 43 y 44 del proyecto sancionado por el Honorable Senado; que no po-

dian admitirse sin falsear por su base los principios que él (el señor Diputado) había sentado; y por esa razón, la comisión había creído necesario presentar el proyecto en discusión, modificando en los expresados artículos el proyecto del Senado y el del Gobierno, pero conformándose en todo con los principios consignados en la Constitución y con su texto, y evitando en lo posible todas aquellas prescripciones que pudieran poner á los Jueces Federales bajo la dependencia de los otros poderes, para garantir la libertad de sus procedimientos. Que el Poder Judicial, constituido en esa independencia, merecería el respeto de los pueblos y de los otros poderes del Estado, para llenar la alta misión que la Constitución le había confiado, misión que tenía por objeto dar una interpretación uniforme á las leyes, y que suponía la mayor instrucción y providad en los Jueces Federales. Que podría sin embargo, suscitarse alguna alarma al ver que á este poder se concedían atribuciones tan poderosas que casi podía llamarse la omnipotencia en el sistema representativo que nos rige, pero que ese temor se desvanecería al considerar que ningún poder podía aspirar á despotizar sin contar con los elementos necesarios para conseguirlo, como la fuerza física, etc.

Que si se concediesen, por ejemplo, al Poder Legislativo las facultades que competen al Judicial concediendo al mismo tiempo que está encargado de dictar la ley, la facultad de interpretarla y aplicarla á su arbitrio, era claro que se le pondría en el caso de dictar leyes que viniesen á falsear la Constitución, sin que ese mal tuviese remedio alguno. Que si esas atribuciones se concediesen al Ejecutivo, como este poder tenía la fuerza, era también claro que era más apto para la usurpación de las atribuciones de los otros poderes, y entonces se vería pesar esa acumulación de facultades sobre la Nación, anulando á los otros poderes; y era por esta razón que en nuestro sistema debía desconocerse el recurso de la fuerza para mandar, de manera que un individuo pudiera ser protegido contra el abuso de cualquier poder sin recurrir á ella. Que esto era, pues, lo que se conseguiría con los Tribunales Federales: Que la Justicia Federal, interpretando las leyes uniformemente, en cualquier parte que se hubiese violado el derecho de un pueblo, ó de un individuo, le dispensara su protección, sin que pudiera temerse un avance de su parte desde que no tiene la fuerza ni la iniciativa de la ley, y sería siempre un muro contra el abuso de los otros poderes, desde que no podía aspirar á la usurpación, y solo influir por el legítimo poder de la razón y de la ley.

Que estas breves consideraciones eran bas-

tantes en su concepto para que la Honorable Cámara comprendiese las ventajas que presentaba este proyecto, y la necesidad de plantear cuanto antes los Tribunales Federales. Que si se adujesen algunos argumentos en oposición al proyecto en el curso de la discusión tendría el honor de contestarlos, admitiendo las modificaciones que fuesen razonables.

El señor Quesada que votaría en favor del proyecto en el concepto de que el pensamiento general de él era dar una ley orgánica de los Tribunales Federales; pero que estaba en oposición á algunas de sus bases y se reservaba combatirlas en la discusión en particular.

No tomando la palabra ningún señor Diputado se dió el punto por suficientemente discutido, se sometió á votación el proyecto en general y fué aprobado por unanimidad.

Se puso en discusión el artículo 1º; su tenor es el siguiente:

Artículo 1º La Justicia Federal será ejercida en todo el territorio de la Confederación por la Suprema Corte de Justicia, y por los Tribunales inferiores que establece esta ley y los que en adelante estableciere el Congreso.

El señor Gutierrez pidió se leyesen los artículos 91 y 97 de la Constitución y se leyeron éstos.

No tomando la palabra ningún señor Diputado se procedió á votar el artículo 1º y fué aprobado por unanimidad.

Se puso á discusión el artículo 2º

Art. 2º Los Tribunales Federales procederán siempre con arreglo á la Constitución y á las leyes nacionales que estén en conformidad con ella.

El señor Quesada expuso: que iba á manifestar los fundamentos que tenía para oponerse á la última parte del artículo en discusión, en la parte que dice «y á las leyes nacionales que estén en conformidad con ella,» porque encontraba en esto, una atribución ilimitada para aplicar ó no las leyes, según las considerase el Poder Judicial; bajo esta base difería esencialmente de todos los Tribunales judiciales del mundo, no habiendo otro ejemplo análogo, sino en los Estados Unidos de la América del Norte, y que consideraba esta imitación inaplicable, tanto por las especialidades del país argentino, como porque la Constitución Nacional es más centralizadora que la de Norte América. El rol de los Tribunales de Justicia debe reducirse á aplicar las leyes dictadas por el Cuerpo Legislativo, ciñéndose al texto expreso, porque á medida que la aplicación de la ley es más imparcial, ofrece el poder judicial mayores garantías, sin que pueda quedar al arbitrio del Juez la facultad de aplicar ó no una ley, cuyo cumplimiento se solicita; porque esto importaría conceder la arbitrariedad como base de la justicia quedando

los derechos y obligaciones que reglan las relaciones de hombre á hombre, sujetos á la voluntad arbitraria de los jueces.

Que no es del rol del Poder Judicial juzgar las leyes sino aplicarlas á los casos ocurrentes: que cuando se ocurre á un Tribunal de Justicia no es para preguntar si una ley es equitativa, constitucional ó no, sino para pedir su cumplimiento, haciendo real su prescripcion escrita, y sobre esta base inamovible reposa entonces la seguridad de los derechos y las garantías más apetecibles de la vida civil. Que cuando el Congreso ha dictado una ley que ha mandado cumplir al Poder Ejecutivo, esa ley lleva la presunción legal de constitucional sin que á nadie ocurra que hay un poder que pueda excusarse de cumplirla, porque entiende que no es conforme con las doctrinas de la Constitución; pero que desde que se organice un poder con facultad de hacer este exámen previo, se desprestigia la ley, se mina el principio de autoridad, tan esencial para la conservación del orden en el país; se altera el rol de la magistratura, elevándose un poder omnipotente y vitalicio, que puede sordamente minar los otros poderes y convertirse en un poder político absorbente ó irresponsable. Que el Poder Judicial, organizado bajo las bases del proyecto que se discute, tiene la facultad de examinar precisamente la constitucionalidad de las leyes, de aplicarla, ó no, según entienda la doctrina constitucional, pudiendo mezclarse en esta interpretación los intereses y pasiones de los partidos, con perjuicio de los derechos y garantías del individuo; que lo arbitrario sirve entonces de fundamento para los juicios y la vaguedad de las doctrinas de excusa para la injusticia de las sentencias.

Que recordaría lo que dice Tocqueville hablando del Poder Judicial de los Estados Unidos, que se necesitan para desempeñar estas funciones no solo jurisconsultos sino hombres de estado, capaces de discernir el espíritu de su tiempo, afrontar los obstáculos para mantener aquel poder tremendo sin abusar de él; que el día que jueces imprudentes ó corrompidos desempeñasen tales funciones, peligraba la paz y la unión; que por esto temblaba al pensar la facultad omnipotente que se intentaba conceder á la Suprema Corte.

Se teme que el gobierno democrático, siguiendo las tendencias que dominan sus poderes, concentre toda su fuerza en el Poder Legislativo por ser el poder que emana más directamente del pueblo, y que dictando leyes que ataquen la Constitución, ésta sea anonadada, y para evitar este temor pueril, se pretende crear un tribunal que tenga el poder de cumplir ó no las leyes, desprestigiándolas y anulándolas lenta y oscuramente; que se permitiría

examinar cual de estos dos sistemas ofrecía más peligro, si el confiar en el Poder Legislativo y cumplir su mandato, ó dejar al Poder Judicial el juzgamiento de las leyes y su aplicación ó no.

Que si era cierto que el Poder Legislativo podía dictar leyes inconstitucionales, la Constitución había tomado todas las medidas preventivas para evitarlo; que la renovación periódica de la Cámara, su organización, el mecanismo observado para dictar las leyes, el veto concedido al Poder Ejecutivo eran garantías suficientes de que cuando la mayoría sancionaba una ley, esa ley debía ser respetada legal y constitucionalmente y por tanto cumplirse. Que no debía haber poder alguno que le negase su valor legal, sin exponer la sanción del Poder Legislativo á un desprestigio completo.

Que por el contrario, la organización del Poder Judicial, la inamovilidad de los Jueces, lo reducido del número, lo oscuro del debate, ofrecía menos garantía en este poder y aumentaba los peligros de que abusase del tremendo poder de cumplir ó no las leyes.

Que si en los Estados Unidos se encontraba organizado ese poder bajo estas bases, era preciso recordar los antecedentes históricos de aquel, y que creía encontrar un motivo y una explicación en el carácter del Parlamento Inglés, absoluto, constituyente y legislativo á la vez; y lógico es creer que las colonias al emanciparse recordaron la organización de la Metrópoli y buscaron un contrapeso al Poder Legislativo, cuyo recuerdo les asustaba, y dieron entonces á la Suprema Corte de Justicia aquella facultad. Que entre nosotros todos los poderes eran limitados, fija la órbita en que funcionan y por tanto exenta de los temores que pudieran abrigar los norte-americanos al emanciparse.

Que por estas razones creía más prudente, más conforme á la índole de los Poderes Argentinos, organizar la Justicia Federal para que aplique la ley su texto expreso, sin darle el poder de dejar de cumplirla, que por esto estaría por la supresión de las palabras: «y á las leyes nacionales que estén en conformidad con ella».

El señor Funes: Que el señor Diputado preopinante había impugnado el artículo en discusión, manifestando cierta extrañeza al ver que esa atribución solo en Norte-América se concede al poder judicial. Que si esa atribución pudiera traer algun inconveniente, desaparecería ante las razones que iba á aducir.

Que si tuvieran algun valor los argumentos que el señor Diputado había emitido en contra de esa atribución, comparadas con las razones que los legisladores norte-americanos tuvieron para acordarla al Poder Judicial, sin

duda que los escritores de Norte-América habrían recordado esos argumentos, pero que lejos de sancionarlos, explicaban muy satisfactoriamente los motivos ó fundamentos de esa atribución.

Que se había querido defender al ciudadano en sus libertades hasta del mismo Poder Legislativo, y nada mas natural que encomendar su defensa al Poder Judicial, que como había dicho antes, no podía abusar de sus atribuciones por su naturaleza y modo de proceder.

Que si así no fuera ¿dónde recurriría un ciudadano que se viese gravado por los resultados de una mala ley? Que ya había demostrado en otro momento que ninguno de los otros poderes podía tener esta atribución sin abusar de ella, porque tendrían en su mano los medios de cometer avances que no debían temerse del Poder Judicial.

Que en Inglaterra, el Poder Judicial no podía decirse poder político, desde que secundando al Monarca y á la Legislatura, desempeñaba un rol subalterno. Pero que nuestra Constitución había querido crear un poder soberano en el Judicial, había querido conferirle ese carácter político que se le daba en el proyecto, para que pudiera garantizar su independencia y conservarse á la altura de los otros poderes. Que se temía que ese Tribunal compuesto solamente de nueve hombres pudiera equivocarse alguna vez, pero que mas debía temerse que cometiera errores y abusos el Poder Legislativo que se renueva periódicamente, y que como encargado de dictar la ley, podía falsear los principios de la Constitución si no hubiese un poder moderador encargado de sostenerla y defenderla, atribución que era menos peligrosa en el Poder Judicial, porque éste al menos, no podía variar la Constitución, y marchaba sobre una base fija, la inviolabilidad de aquella, en que consistía la felicidad del país.

Que, además, esos nueve jueces eran hombres que debían inspirar la mayor confianza, por las cualidades que se suponen en ellos, y si alguna vez abusaban, culpa sería del Poder Ejecutivo y del Senado, porque aquel no podía nombrarlo sin la aquiescencia de éste. Que si se consideraba, pues, que era un cuerpo numeroso el que iba á nombrar esos jueces, debían ellos inspirar la mayor confianza.

Que á su juicio, esa novedad de la Constitución de los Estados Unidos era una garantía más de los derechos del ciudadano, y creía que desaparecerían los temores que se habían manifestado, si se consideraba que en aquella Nación se tenía la experiencia de cincuenta años, en los que esa atribución había sido siempre acatada por los pueblos, adquiriendo cada día mayor prestigio; y el señor

Diputado concluyó diciendo: ¡si vemos, pues, que allí produce tan buenos resultados, por qué no hemos de adoptarla nosotros?

El señor Quesada: Que el señor Diputado informante le había contestado con el argumento de la providad que debía suponerse en los Jueces Federales. Que Tocqueville, en su conocida obra *De la democracia en América*, hablando del Poder Judicial de los Estados Unidos, decía: que si alguna vez la Corte Suprema llegaba á componerse de jueces malvados ó ignorantes, el país se exponía á la anarquía ó á la guerra civil, porque los Jueces Federales no solo debían ser buenos ciudadanos, instruidos y honrados, sino hombres de Estado, capaces de discernir el espíritu de su tiempo, vencer los obstáculos, y separarse de la corriente cuando su ola amenaza llevar con ellos mismos la soberanía de la Union y la obediencia debida á las leyes. Que él (el señor Diputado) creía que esos jueces serían capaces, atendidas las condiciones con que eran elegidos, pero que también podía suceder lo contrario, y siendo así no era prudente exponerse á esos males por el temor de que los poderes colegisladores dictando una ley, violasen la Constitución; que por ese temor se creaba un poder inquisitorial hasta cierto punto, sin fijarse que el mismo peligro que se concebía respecto de aquellos había respecto de éste, que podía aplicar la ley á su arbitrio, segun comprendiese las doctrinas constitucionales, sin que hubiese una garantía fija de que la concebiría y aplicaría debidamente desde que podía entrar en el terreno de las vaguedades, puesto que la Constitución solo contenía principios generales. Que encontraba mayores garantías en todos los casos cuando se sabía de antemano que la ley escrita había de cumplirse siempre por el Poder Judicial.

Que había dicho que Norte América era el único país que había podido realizar esta novedad, pero que ese ejemplo no podía ser seguido por nosotros por muchísimas razones, y entre otras, porque nuestra Constitución era mucho mas central que la de los Estados Unidos; que nuestro Congreso tenía atribuciones de que carecía el de Norte América, que dictaba los códigos, y allí cada Estado se daba el suyo: que nuestro Poder Ejecutivo era mas fuerte y central, y no necesitaba el contrapeso del Poder Judicial como se quería organizar, puesto que la Constitución limitaba la órbita de sus atribuciones de una manera clara é incuestionable. Que además de esto, si nuestra Constitución había creado tres poderes federales, es decir, nacionales, independientes y soberanos, no comprendía la necesidad de que se constituyese el Poder Judicial, con un carácter enteramente central y

unitario, desnaturalizando el principio federal; porque esto sería establecer el Congreso de Indias con el título de Corte Suprema de Justicia Federal, con omnímodas facultades, y sin contrapeso ni equilibrio en los otros poderes. Que mejor sería ceñirse á las prácticas de otros pueblos, en los que el Poder Judicial aplicaba el texto expreso de las leyes á los casos ocurrentes; que consideraba esto mas aplicable al modo de ser del país, su legislación y sus hábitos; que seguir la peligrosa práctica de Norte América de la que sus mismos defensores no ocultaban sus peligros, presentándolo como un fenómeno. Que él temía que ese fenómeno no pudiera realizarse entre nosotros, y que organizado ese poder así, fuese un obstáculo serio para el desenvolvimiento de la libertad en estos pueblos, en donde las garantías sociales eran una necesidad premiosa.

El señor Ministro de Justicia: que segun lo que habia oído, los señores Diputados que hacian oposicion á este artículo estaban dispuestos á aceptarlo con la supresion de la segunda parte, que difiere á los Tribunales Federales la atribucion de proceder con arreglo á las leyes nacionales que estén en conformidad con la Constitucion.

Que entre nosotros todos los poderes derivaban de la Carta y ninguno tenia facultad para variarla, y no sucedia como en Inglaterra donde el Parlamento tenia la facultad de modificar la Constitucion. Que en la Confederacion cualquiera ley que no fuese dada segun la Constitucion no sería tal, y por consiguiente no podria obligar al Poder Judicial que estaba encargado de sostener y defender los principios establecidos en aquella. Que creía, pues, mas conveniente conceder esta facultad tan grande como parecia, al Poder Judicial, que poner la omnipotencia en manos de los otros poderes, que podian coligarse y dar una ley que falsease los principios de la Constitucion, desde que no podia presumirse que aquel llegase á ser temible, porque, como habia dicho muy bien un señor Diputado, no tenia la iniciativa en la ley y solo podia aplicarla en los procesos particulares que fuesen á su fallo.

Que era necesario, además, hacer entender á los Jueces que no tendria excusa en la constitucionalidad de una ley la inconstitucionalidad de sus fallos, porque era precisamente el primer deber de ellos sostener la Constitucion contra todo ataque, venga de donde viniere. Que por estas razones era necesario decir en esta ley lo que ese Tribunal habia de hacer: — que se le daba una ley, y como poder soberano debia interpretarla y aplicarla ó no, segun que fuese conforme ó contraria á los principios de la Constitucion. Que

por esta consideracion, creía, que esa parte del artículo era una de las prescripciones más importantes, y que debía procurarse quedase consignada en ella; porque aunque nuestra organizacion no era perfectamente igual á la de Norte América, era, sin embargo, muy semejante, y por consiguiente, era de allí de donde habian de tomarse ejemplos, y no habia un autor que tratase de las instituciones de los Estados Unidos que no hubiese notado ventajas en esta atribucion de la Corte Suprema de Justicia.

El señor Gonzalez: que estaba tambien en oposicion á la segunda parte del artículo que se discutia, é iba á expresar las razones en que se fundaba su opinion. Que en todas partes el Poder Judicial era el encargado de aplicar la ley tal cual se dictaba por el Legislativo. Que además de esto, la Constitucion no hacia mas que sentar los principios generales, pero jamas descendia á organizar y reglamentar el ejercicio de esos derechos, ni preveia los casos particulares, porque esto era obra de la Legislacion que complementaba aquella; era obra de las leyes que debia dictar el Congreso; que por consiguiente, si se dejaba al Poder Judicial la facultad de declarar si las leyes estaban ó no conformes con la Constitucion se le habria dado una atribucion legislativa y una facultad de juzgar, que muchas veces seria arbitraria. Que cuando se presentaba un proyecto de ley lo primero en que se fijaba el Congreso era en que estuviese conforme con los principios de la Constitucion, y que cuando declaraba que esa ley era constitucional sancionándola, siendo además aprobada por el Ejecutivo, habia, por lo menos, una presuncion muy fuerte en favor de la constitucionalidad de ella. Que por otra parte, el Poder Judicial tenia, como los otros poderes, atribuciones que estaban limitadas por la Constitucion, y no sería justo ni prudente extender esas atribuciones hasta el extremo de que un simple Juez de seccion, tuviese la libertad de decir, no aplico esta ley, porque no me parece arreglada á los principios de la Constitucion. Que esta facultad tan amplia concedida á los jueces, podia muy bien convertirse en una arma poderosa, para detener la ejecucion de leyes tal vez salvadoras del país á juicio de la mayoría que las habia dictado, si esas leyes no fuesen aprobadas por los jueces federales, cuyos principios políticos podian ser contrarios. El señor Diputado dijo: Me permitiré, señor, poner un ejemplo para patentizar este peligro. Supongamos que el Congreso en vista de los abusos cometidos, en las elecciones, dicta una ley privando del derecho electoral á cierta clase de personas que en su concepto no tienen la capacidad ni la independencia necesarias para

votar. Esta ley que en mi opinion seria muy constitucional, podia muy bien tacharse de poco conforme al principio de sufragio universal, que segun algunos, proclama la Carta; y no dársele ejecucion por un Tribunal federal, que faltaria para votar á las personas privadas de este derecho por la ley; que se presentasen reclamándolo, y atacando esa disposicion como inconstitucional. Hé ahí, pues, como una medida política, tal vez salvadora de la situacion del país, podia quedar sin ejecucion, por la amplia facultad que se quiere conceder á los jueces federales de juzgar la ley antes de aplicarla.

Pondré otro ejemplo mas para demostrar con mayor claridad el peligro de esta atribucion. Acaba de sancionar la Cámara una ley poniendo derechos diferenciales á la exportacion. Los que hemos votado contra esa ley, creemos que ella ataca la libertad comercial concedida por la Constitucion, desde que tiende á prohibir el comercio entre nuestros mercados y los de Buenos Aires y Montevideo. Si uno de los adversarios de esta medida fuese Juez de seccion, por ejemplo en el Rosario, y se presentase un comerciante pidiendo la exoneracion del pago del derecho diferencial para llevar sus frutos á Buenos Aires; porque la ley en virtud de la cual se le cobraba ese derecho no era conforme á la Constitucion, teniendo el Juez que juzgar la ley y fallar segun su conciencia, decidiria en favor del solicitante y en contra de la ley, que en su opinion no es conforme á la Constitucion. Si el Juez fuese diferencialista, daria un fallo contrario; y de esta manera las leyes de mas trascendencia para los intereses del país, estarian á la merced de la interpretacion que les quieran dar los jueces federales.

No es posible, señor, dejar nuestras leyes en esta incertidumbre; porque es quitarles la mayor ventaja que es la de dictar reglas claras y precisas, á las que los ciudadanos tienen que conformar sus actos. Las leyes confieren derechos y crean obligaciones que los hombres contraen en la seguridad de que los jueces las han de aplicar tales cuales son, sin juzgarlas ni desobedecerlas. Estas son las razones que por ahora se me ocurren para oponerme á la sancion de ese artículo.

El señor Ministro: Que aceptaba de buena gana las explicaciones aducidas por el señor Diputado declarando que la Constitucion solo establecia los grandes principios que sirven de norma para las leyes reglamentarias; y aceptaba tambien la consecuencia de conservar esos grandes principios y evitar todo acto que pudiera falsearlo.—Pero que era por esto, que la Constitucion debia ser observada ante toda ley, y cuando una ley

se opusiese á ella, debia considerarse como no existente. Que eso y nada mas importaba la atribucion que se queria conceder al Poder Judicial, es decir, la facultad de no aplicar esa ley cuando la creyese contraria á la Constitucion. Que el señor Diputado que le precedia habia supuesto algunos casos en que podria verificarse esto, pero que en esos casos no era un Juez de Seccion el que habia de decidir sobre la aplicacion de la ley sino una personalidad mas alta de la Justicia Federal. Que si un comerciante, por ejemplo, no queria pagar los derechos diferenciales y se quejase contra la ley ante un Juez de Seccion, si éste se atrevia á declarar que esa ley no era constitucional, sin que su texto contrariase terminantemente la Constitucion, podria ser acusado y el asunto vendria á la Corte de Distrito y en su caso á la Suprema Corte de Justicia Federal. Que no habia mas recurso que éste y otro cualquiera seria ineficaz para garantir los principios de la Constitucion. Que el señor Diputado opinaba que bastaria dejar á los jueces federales la libertad de aplicar un artículo constitucional en el caso de que la ley no estuviese conforme con él, pero que el señor Diputado confesaba entonces, que cuando una ley no estuviese conforme con los principios constitucionales, no debia ser aplicada por un Juez; que á su juicio no podia tener otro espíritu ese argumento. Que quisiera que se le dijese, ¿de donde naceria el derecho en los poderes colegisladores para obligar al Judicial á aceptar y aplicar una ley contraria á la Constitucion, siendo ese poder igualmente soberano é independiente que aquellos, segun la Constitucion, que era la suprema ley que designa á todos los poderes sus atribuciones? Que habia dicho que nuestro sistema de Gobierno no era como el de otros países en que el Poder Legislativo podia hacer reformas en la Carta, y por esa razon eran tan altas las facultades del Poder Judicial; por eso una ley inconstitucional no podia obligar la conciencia de un Juez Federal, porque esto era necesario para conservar el equilibrio de los poderes. Que no habia, pues, inconveniente en que se concediese esa atribucion al Poder Judicial que iba á fallar y aplicar la ley en los casos particulares segun su conciencia. Que por qué, pues, no habia de dársele esta garantia, desde que ella no importaba otra cosa que la facultad de defender nuestros mas preciosos derechos y los principios consignados en la Constitucion, y siendo la Justicia Federal el único poder que no podia abusar de sus atribuciones?

El señor Quesada: Que no habia escuchado una razon poderosa que destruyese los argumentos que se habian aducido en contra

del artículo en discusión. Que se traía como argumento el temor, en cierto modo pueril, de que el Congreso abusase de sus atribuciones y no se temía que abusara la Corte Suprema de Justicia; que quisiera saber cual era la garantía que ésta presentaba de ajustarse á la Constitución, cuando entraba en el juicio de la constitucionalidad de una ley y en la vaguedad de las doctrinas constitucionales, porque, como se había dicho muy bien por el señor Ministro, la Constitución solo establecía los grandes principios, y al interpretarlos podía errar el Poder Legislativo como la Suprema Corte, á la que no reconocía infalibilidad; que así pues, lejos de ver en los Tribunales Federales una garantía de estabilidad, creía que una vez concedida esa atribución al Poder Judicial, se le convertiría en un elemento pernicioso, en un poder que podía dejar de cumplir la ley y desprestigiarla, precisamente en la época de nuestra organización, en que debía sentarse sobre una base estable el principio de autoridad. Que cuando dos poderes colegisladores habían sancionado una ley era porque la creían constitucional. ¿Por qué suponer en la alta Corte, esa especie de omnisciencia, de infalibilidad, para creerla capaz de corregir los errores supuestos ó ciertos de esos poderes?

Que por su parte no podía creer que nueve jueces reuniesen las luces de toda la Confederación; y repetía, que no podía darse á este poder la atribución de aplicar la ley á su arbitrio, porque esto sería invadir las atribuciones de los otros poderes. Que él estaba persuadido de que en la Corte Suprema de Justicia podía haber divergencia de opiniones, división, intereses opuestos, suponiendo el caso muy natural de que unos jueces sostuviesen un partido político y otros otro, porque esos jueces no serán ajenos á la política ni á las pasiones exageradas, y entonces ¿cómo podía presentar ese cuerpo mayores garantías que aquellos que eran la expresión de la voluntad popular, y cuyas atribuciones estaban tan limitadas por la Constitución? Que no necesitaban, pues, de ese tercer poder que viniese á vigilarlos, desde que la Constitución había limitado sus facultades y tomado medidas para la formación, sanción y promulgación de las leyes.

Que por otra parte, si esto de conceder la omnipotencia y la infalibilidad al Poder Judicial fuese un descubrimiento tan grande como se había querido manifestar por los sostenedores del artículo, muchos otros países lo habrían adoptado, y, sin embargo, se veía que solo Norte-América había seguido este camino: que ¿por qué, pues, se quería admitir un principio que necesariamente había de traer muchos inconvenientes, desde que tendía á destruir jesuiticamente la ley? A establecer la

duda como base de las relaciones sociales, pues nadie podía saber cómo juzgarla la Corte Suprema, desde que pudiera dejar de aplicar la ley escrita.

Que se había dicho también, en apoyo del artículo, que un Juez Federal podía ser acusado cuando hubiese interpretado mal una ley; pero que él (el señor Diputado) no comprendía cómo se pudiera acusar la conciencia de un juez su inteligencia al aplicar la doctrina constitucional, ni cómo se le podría probar que él no creía dar la verdadera interpretación á la ley según su saber, su ciencia. Que ¿quién podía juzgar de la conciencia de los jueces, desde que á su arbitrio quedase aplicar ó no las leyes, según las entienden, constitucionales ó no? Que por estas razones votaría contra ese artículo que concede la facultad de aplicar ó no las leyes al Poder Judicial.

El señor Funes: Que cuando se trataba de sancionar una ley de resultados políticos debía calcularse siempre lo más probable; porque no había una cuestión política que pudiera resolverse con la precisión de un cálculo matemático. Que él no dejaba de abrigar también los temores manifestados por los señores Diputados que se oponían al artículo en discusión, porque ningún poder podía seguir constantemente una marcha infalible, pero que la más racional y probable debía siempre merecer la aprobación de la Honorable Cámara: que debía verse, pues, donde había más probabilidad de buenos resultados. Que como las Cámaras se renovaban periódicamente y el Ejecutivo duraba poco tiempo, era claro que debían marchar siempre bajo la influencia de las mayorías, é imparcialidad para deliberar siempre con entera libertad, y que por su instabilidad no estaban en el caso de interpretar uniformemente la Constitución y las leyes: que la Corte Suprema; por el contrario, no podía ceder á esa influencia momentánea y subversiva, porque como se había dicho, el oficio de Juez era permanente, y por lo mismo, estaba en el caso de obrar con más independencia, y ofrecía mayores garantías de interpretar uniformemente la ley y resistir á los avances inconstitucionales que intentasen las mayorías. Que un señor Diputado había citado algunas palabras de Tocqueville y que venían en apoyo del mismo artículo que trataba de impugnar, porque confesaba que eran buenos los principios según los cuales procede el Poder Judicial en Norte América, y muy satisfactorios los resultados obtenidos; que solo había peligro de que ese poder abusase cuando los jueces fuesen ineptos ó malvados; y el señor Diputado dijo: Pero nosotros no podemos suponer que nuestros jueces sean ineptos ó malvados porque entonces el Ejecutivo y el Senado serían respon-

sables, desde que aquel los nombra con el consentimiento de éste.

El señor Ministro: Que diría cuatro palabras en contestación á las observaciones que habían hecho últimamente los señores Diputados que impugnaban el artículo en discusión. Que todos los argumentos aducidos por ellos tendían á probar la inconveniencia de conceder al Poder Judicial la atribución de no aplicar la ley cuando la creyese inconstitucional y á que eran bastantes los poderes Legislativo y Ejecutivo para dictar leyes conformes en todo con los principios establecidos en la Carta. Que él creía que sería imposible la existencia del Poder Judicial como poder soberano si se le imponía la obligación de entender las leyes como el Congreso, que se habría inutilizado esa personalidad que por la Constitución era tan independiente, como los otros poderes, y se le convertiría en un poder completamente inútil despojándole del ejercicio de la soberanía. Que por lo demás ese poder tenía que respetar como los otros las leyes vigentes, y cuanto más podía dejar de aplicarlas á un caso particular, cuando en su conciencia creyese que eran inconstitucionales: que lo contrario sería reconocer el ejercicio de dos poderes soberanos solamente y no de los tres que establecía la Constitución: que observasen, pues, los opositores al artículo que estando la acción del Poder Judicial reducida á los casos particulares, es decir, á los procesos que fuesen á su fallo, no podía invadir en manera alguna las atribuciones de los otros poderes.

Que por otra parte, no podía negarse la facultad de juzgar de la constitucionalidad de una ley al poder encargado de aplicarla y sostener la Constitución, porque como los otros poderes públicos, cuando se trataba de dictar una ley, debía admitir las objeciones que pudieran hacerse á su constitucionalidad. ¿Que como se quería despojar, pues, al Poder Judicial de una atribución que tenían los otros poderes igualmente soberanos? ¿Cómo se pretendía que ese poder prescindiera de observar fielmente la Constitución en el ejercicio de su soberanía? Que esto sería exigir imposibles: que convenia pues, según la razón, la Constitución y conveniencia nacionales, que el Poder Judicial juzgase de la constitucionalidad de las leyes en los casos particulares, y las aplicase según su conciencia, desde que no se le concedía la iniciativa en aquellas. Que un señor Diputado había dicho, que era hasta cierto punto pueril el temor de que los otros poderes absorbiesen toda la soberanía si no se concedía esa atribución al judicial: que le parecía pueril este temor al señor Diputado; pero que si la Justicia Federal tenía la facultad de no aplicar una ley, solo en los casos par-

ticulares, mas pueril debía considerarse entonces el temor manifestado por los opositores del artículo de que el Poder Judicial absorbiese la soberanía de los otros poderes.

Que por otra parte, si como un señor Diputado había dicho, no había peligro de que el Congreso y el Ejecutivo dictasen una ley inconstitucional, no le había tampoco en establecer que la Suprema Corte dejara de aplicar las leyes inconstitucionales, quedando no obstante obligada á aplicar las que estuviesen en conformidad con la Constitución, que es lo que dice el artículo. Que advirtiesen, pues, los señores Diputados que combatían el artículo, que si se querían conservar los principios establecidos por la Carta, era absolutamente necesario conceder esta atribución al Poder Judicial, porque solo así se podía responder del porvenir y libertad del país.

El señor Quesada: Que había tomado la palabra solo para contestar al señor Ministro que de la doctrina sentada por él se deducía que de todos los países regidos por el sistema representativo, solo en los Estados Unidos había tres poderes soberanos porque todos menos éste, habían negado al Poder Judicial la atribución que se le quería conceder en el artículo en discusión á pesar de que la Constitución había limitado sus atribuciones á casos determinados y á ciertos asuntos de interés general, juzgando con arreglo á las leyes sin ser permitido su exámen previo; que esto mismo sucedía en todas partes, excepto en los Estados Unidos; que en Chile, por ejemplo, había tres poderes soberanos, y no podía decirse que allí estaba en peligro la libertad y las instituciones, porque no se le hubiese concedido al Poder Judicial la facultad de dejar de aplicar las leyes cuando las juzgase inconstitucionales. Que en ese país, como en muchos otros, existía la independencia de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que á éste se le concediese la facultad que le acuerda el proyecto en discusión.

El señor Ministro: Que sostendría siempre que los países regidos por un sistema representativo, donde el Poder Judicial se viese forzado á aplicar la ley, aun cuando la creyese inconstitucional, no había mas que dos poderes soberanos: el Legislativo y Ejecutivo, porque el Judicial no sería poder, sino una dependencia de los otros.

El señor García: Que está conforme con las opiniones vertidas por los señores Diputados que impugnaban el artículo que se discutía y por lo mismo se iba á limitar únicamente á manifestar las dudas que le asistían sobre si era constitucional ó no tal cual estaba redactado, pues creía que él debía limitarse á conservar al Poder Judicial en la esfera que la Constitución le había señalado; y el señor

Diputado dijo: Bien, pues, la Constitucion en su artículo 97, hablando de las atribuciones del Poder Judicial, dice: Corresponde á la Corte Suprema y á los Tribunales inferiores de la Confederacion el conocimiento y decision de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucion, por las leyes de la Confederacion, etc.

¿Qué importa, señor, esa facultad de decidir las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucion y por las leyes de la Confederacion? Importa sin duda que esa Constitucion y esas leyes que han sido sancionadas una vez, no pueden dejar de observarse por ningun poder, mientras no sean modificadas ó derogadas por el mismo poder que las dictó. Es claro entonces, que si se acuerda al Poder Judicial el derecho de no aplicar la ley cuando lo crea inconstitucional, vamos á violar la Constitucion, y á sancionar la deformidad de que el Congreso y el Ejecutivo tienen que callar ante la interpretacion que un Juez de distrito dé á la Constitucion y á las leyes de la Confederacion. Véase, pues, que vamos á sancionar una deformidad, y esto es para mí muy grave, señor.

El señor Ministro: Que parecia que todo lo que se habia dicho no era bastante para que se comprendiese, que no se dejaba el juicio de la constitucionalidad de una ley á un solo Juez, y mucho menos á uno de distrito; pues no se tenia en vista que un juicio tenia muchas instancias y que era la Corte Suprema y no un Juez de distrito la que resolvía en última instancia, ni se tenia en cuenta que el artículo hablaba del Poder Judicial, y no de cada uno de sus Jueces al concederle la atribucion que se impugnaba.

El señor García: Pero el Poder Judicial está representado no solo por la Suprema Corte de Justicia sino por las Cortes de Distrito y los Jueces de Seccion.

El señor Ministro: Que si el Poder Judicial estaba representado por la Suprema Corte, por las Cortes de Distrito y por los Juzgados de seccion ¿cómo decia entonces el señor Diputado que la constitucionalidad de una ley estaba librada al juicio de un hombre, de un Juez de seccion? Que luego lo que habia dicho el señor Diputado no podia corresponder á ningun otro poder, y que era preciso que los Tribunales Federales fueran los únicos que podian decidir en materias de justicia, para que no obrasen jamás bajo la presion de otros poderes, porque entonces no sería soberano é independiente, sino un ramo de éstos.

El señor García: Que habia asuntos en que no podia apelarse del fallo pronunciado por un Juez de Seccion y era ese el caso á que se referia. Que habia otros en que debia fallar exclusivamente la Suprema Corte, y en

ese caso, deseaba que se le dijese ¿qué garantía de infalibilidad ofrecian los miembros de ella para que se creyese que no podian engañarse como el Congreso? Que el señor Diputado informante habia invocado como razon para suponer mayor acierto en la Corte Suprema que en el Congreso, la inamovilidad de los Jueces Federales y la amovilidad de los miembros de éste; y él (el Diputado que habla) creía que la inamovilidad no era una razon bastante para eximirlos de engañarse ó errar á los miembros del Tribunal Federal: que la circunstancia de que pudieran ser juzgados, no importaba una garantía, porque en su arbitrio estaria excusar el juzgamiento apelando á su conciencia privada, á la que se queria librar esa calificación ó interpretacion, y no podia juzgarse la conciencia de un Juez; que éste debia ceñirse á la prescripcion legal expresa, porque no podia tener otra conciencia que la de la ley escrita, ni sacar deducciones de ella en pro ó en contra del asunto sobre que iba á juzgar. Que repétia que deseaba se le dijese que garantía presentaba el Poder Judicial para proceder con el mayor acierto posible, y porqué razon, en vez de crear un poder sujeto á la ley se queria hacer un poder arbitrario? y el señor Diputado concluyó diciendo que por estas consideraciones votaria contra el artículo en discusion si no se suprimia la atribucion que habia impugnado.

El señor Funes: Que si el señor Diputado hubiese prestado un poco de atencion á las funciones judiciales de que se trataba, habria notado que los Jueces Federales estaban realmente sujetos á la ley, desde que no podian obrar sino de conformidad con la Constitucion y las leyes de la Confederacion que no estuviesen en pugna con ella, pero que si esos Jueces creian alguna vez que la ley que trataban de aplicar, se desviaba de los principios establecidos por la Carta, entonces sería llegado el caso de hacer uso de la atribucion que se le conferia en el artículo en discusion; que lo contrario, es decir, negar al Poder Judicial una atribucion que era indispensable concederle para que pudiese ejercer su soberanía, se opondría al sistema que rige el país; porque si cuando el Poder Legislativo y Ejecutivo sancionaban una ley, esa sancion era soberana, porque aquellos tenían ese carácter, lo mismo debía decirse del Poder Judicial en su ramo, porque era también soberano en él.

El señor García: Sí, señor, es soberano como los otros poderes, pero en la órbita de las atribuciones que la Constitucion les señala.

El señor Funes: Que si el Poder Judicial tuviera que someterse en la aplicacion de la

ley á la voluntad de otro poder, no sería soberano, que, sin embargo, no debía suponerse anulando las leyes que dictase el Legislativo porque dejase de aplicarlas en algunos casos particulares, atribucion que, como habia dicho antes, era indispensable concederle, porque no podia someterse á ningun otro poder sin despojarse de su soberania y convertirse en un ramo de él.

El señor Garcia: Que el señor Diputado se fundaba principalmente para sostener el artículo en la soberania inherente á cada uno de los poderes que en nuestro sistema constituyen el Gobierno; pero que veia que el señor Diputado hacia aplicable esa soberania al Poder General ó Gobierno y particularmente á cada uno de los poderes que lo forman, y que al hacerlo, á mas de no deslindar, confundia la órbita de las atribuciones en que cada uno de ellos debia ejercer esa misma soberania que les acuerda la Constitucion; y el señor Diputado dijo: Si pues, los Poderes Legislativo y Ejecutivo tienen la atribucion de sancionar la ley, al hacer uso de ella no pueden atacar en manera alguna la independencia y soberania del Poder Judicial; y si por el contrario, se dejara á éste la facultad de aplicar ó no esa ley, segun la creyese ó no constitucional, se atacaría entonces la soberania de aquellos. Debe, pues, limitarse el Poder Judicial al único y exclusivo objeto á que por su naturaleza es llamado, para el que ha sido creado, es decir, á aplicar la ley tal como ha sido sancionada por los poderes colegisladores; porque aplicar las leyes á los casos ocurientes es su única y exclusiva atribucion, y es en ella que ejerce esa independencia de que ha hablado el señor Diputado.

El señor Garson: Que estaba conforme con el artículo tal cual lo proponia la Comision; pero que votaria en oposicion á él si los señores Diputados que lo impugnaban le salvaban una dificultad que ese artículo ofreceria para el ejercicio del Poder Judicial si se suprimia su 2ª parte. Que aquel se reducía á decir, «que los Tribunales Federales procediesen siempre con arreglo á la Constitucion y á las leyes Nacionales que estuviesen en conformidad con ella». Que en el caso de que el Congreso dictase una ley contraria á la Constitucion, ¿cómo salvarian los Jueces Federales esa dificultad, si se suprimia la 2ª parte? Que un artículo constitucional deferia á la Justicia Federal el conocimiento y decision de todas las causas que versasen sobre puntos regidos por la Constitucion y por las leyes de la Confederacion, y era claro que en el caso de que una ley reglamentaria estuviese en pugna con un artículo constitucional, el Tribunal debia aplicar este antes que aquella; que si el Poder Judicial podia dar

una sentencia en oposicion á los principios de la Constitucion, tambien los otros poderes podian dictar una ley contraria á ella. Que deseaba pues, que se le explicase cual era la conducta que debia observar el Poder Judicial en ese caso y como, no habia oido una razon que le satisficiera votaria por el artículo puesto en discusion.

El señor Alvear: Que observaba con sentimiento que se hacia oposicion á una atribucion que él llamaria la esencia vital de la Justicia Federal que se trataba de establecer, oposicion que nacia de una exagerada idea de los poderes que componen el Gobierno representativo: pero que si se fijaba la atencion en que cada uno de esos poderes funcionaba independientemente de los otros en la órbita de las atribuciones de las otras. Que la fuente de todos nuestros poderes públicos derivaba del pueblo y éste estaba sujeto á preocupaciones y pasiones que variaban segun los motivos que le agitasen: que por consiguiente, constituir un país librado solo á esa fuente y sin mas garantia ó contrapeso que la representacion de esas pasiones que mueven á los pueblos, sería crear un poder monstruoso, del cual se debian esperar todos los abusos, sin garantias que los otros poderes, porque debia suponerse que sus miembros pertenecian á un partido político, y que no habia motivo para reconocer en esos nueve jueces una sabiduria que se negaba á los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero que era claro que, en primer lugar, ese poder procederia con mas regularidad desde que no emanaba de esa fuente que se llama pueblo; puesto que, no representaba sus pasiones como los otros poderes, sino la ciencia, porque debia suponerse compuesto de personas científicas; que en segundo lugar, no necesitaba para el prestigio y mantenimiento de su poder, de esa popularidad que necesitaban los otros poderes para existir, popularidad á que muchas veces sacrificaban los intereses del Estado. Que no se hallaba, pues, en este caso un Tribunal compuesto de individuos para cuya eleccion se exigian las mayores precauciones, que no podia tener otro prestigio ni influencia, que la que hubiese merecido administrando rectamente la justicia, y que no tenia como los otros la necesidad de adular la opinion pública, porque sus miembros eran inamovibles mientras desempeñasen debidamente su cargo. Que un poder así era mas alto que todos los poderes, porque su mision puramente reguladora ofrecia todas las garantias que racionalmente podian exigirse. Que la cuestion era pues, si los Poderes Legislativos y Ejecutivo podian obrar á pesar de esas oscilaciones peligrosas de los pueblos, con la misma independencia que un Tribunal de carácter inmutable. Que el Con-

greso tenía la misión de dictar la ley y tal vez para contemporizar con preocupaciones del momento, dictaría leyes que tendiesen á falsear la Constitución; que esto sería muy natural, porque sería una consecuencia de esas preocupaciones que los otros poderes tenían que adular, pero que al mismo tiempo sería un mal sin remedio si no se concedía al Poder Judicial la facultad de no aplicar esas leyes que falseasen los principios de la Carta, al Poder Judicial que constituido con mas independencia que los otros poderes, ofrecería todas las garantías que se podían esperar de la imperfección de las cosas humanas; que todo tenía sus inconvenientes, pero que en la teoría de las probabilidades debía adoptarse la que más se aproximase á la razón.

Que se había dicho con mucha justicia, que lo esencial en el sistema que regía al país era que la Constitución no pudiera ser falseada en su reglamentación, por ninguno de los poderes creado por ella, porque su estricta observación era la única garantía de los derechos que aquella concedía á los pueblos y á los ciudadanos; que por consiguiente, cuando esa Constitución hubiese sido infringida, era necesario que ese pueblo, ese individuo, encontrasen un poder que les garantizase el cumplimiento de la Carta que habían jurado, que los apoyase y protegiera en el libre ejercicio de sus derechos; porque la presunción simplemente de que el Congreso no podía dictar una ley inconstitucional, no era bastante para desvanecer en la conciencia de todos el justo temor de que la Carta podía ser violada si se libraba su interpretación á un poder que como había dicho antes, solo representaba las preocupaciones de los pueblos y las pasiones del momento. Que era preciso, pues, que la interpretación de las leyes se librara á la sabiduría de un Tribunal, que no podía obrar bajo la influencia de las pasiones del momento, y pudieran expedirse con una completa independencia de los otros poderes.

Que era claro, pues, que un Tribunal como éste no podía ser un poder absorbente, porque obraría solo en virtud de la fuerza moral que le darian sus sabias decisiones: ¿que porqué se hacía entonces oposición á este artículo? Que había dicho ya que esa oposición se hacía á la esencia del carácter mas precioso que reviste el Poder Judicial, y que por lo mismo era mas necesario su establecimiento; que por consiguiente, votaría en favor del artículo en discusión.

El señor Gonzalez: Que se sostenía este artículo fundándose principalmente en la independencia inherente á los tres poderes soberanos, que la Constitución había creado; pero creía que en el propósito de hacer completamente independiente al Poder Judicial, se

atacaba la soberanía del Poder Legislativo: que debía, pues, buscarse un medio de conservar su independencia á cada poder sin atacar la de los otros. Que ya había dicho, que conceder al Poder Judicial esa atribución sería hacer dependiente de él al Legislativo, porque se le dejaría con la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes dictadas por éste. Que una ley sancionada por el Congreso y aprobada por el Ejecutivo traía la presunción de ser completamente constitucional, al menos había perfecto derecho para suponer que llevaba el sello de la constitucionalidad; y esto bastaba para que se creyesen asegurados los derechos que confería la Constitución. Pero que dejarlo todo á la omnipotencia de ese poder absoluto que se quería crear, repetía, que era atacar la independencia del Poder Legislativo.

El señor Ministro: Que veía que al señor Diputado en el propósito de sostener la independencia de los tres altos poderes del Estado, no le ocurría otro medio que someter al Poder Legislativo el Judicial. Que si se quería que esos poderes se mantuviesen independientes y en la órbita dentro de la cual debían moverse, debía dejarse al Judicial la facultad que se le concedía en el artículo en discusión para que dejase de aplicar la ley inconstitucional en los casos particulares y contenciosos que fuesen á su fallo; así como el Legislativo quedaba en libertad absoluta para hacer declaraciones generales, y el señor Ministro dijo: Pero decía, señor, que el mejor medio de mantener la independencia de los altos poderes constitucionales, es obligar al Poder Judicial á que aplique la ley, sea ó no constitucional, porque esto y no otra cosa importan los argumentos que se han aducido en contra del artículo; decir esto, repito, es atacar la única garantía de nuestras libertades en nuestras relaciones privadas, y por esto, no he querido dejar pasar sin contestación el último argumento del señor Diputado preopinante.

El señor Zuviria: Que había pedido la palabra para hacer notar, que al hablarse del Poder Judicial se olvidaba su calidad de federal, lo que le constituía uno de los tres altos y soberanos poderes sobre que había de sostenerse la Constitución Nacional. Que así como el Poder Ejecutivo tenía voto en la sanción de las leyes, puesto que podía vetarlas, y cuando esto sucedía, era necesario que las votaciones de ambas Cámaras fuesen nominales, y que tanto los nombres y los fundamentos de los sufragantes como las objeciones de aquel poder se publicasen inmediatamente por la prensa; así también para que el Poder Judicial fuese soberano y federal era necesario que tuviese una jurisdicción independiente de los otros poderes y pudieran dejar de aplicar las

leyes que á su juicio fuesen inconstitucionales. Que él no podía descender de este rol para convertirse en un instrumento ciego de aquellos, ni dejar menoscabar su independencia y atribuciones, ni consentir interpretaciones violentas que las leyes pudieran dar á la Carta, siempre que ese alto poder tuviera tambien que interpretarla en los casos particulares y contenciosos que constituyen su exclusiva atribucion.

Que la ley tomada en general es no solo obra del que la dicta sino del que la sanciona y promulga; no solo de éste sino de quien la interpreta al aplicarla. Que los vicios y errores que cualesquiera de estos tres poderes pudieran cometer en sus actos, serian hijos de la condicion humana; pero que las instituciones habian procurado separar esos poderes para evitar el contagio. Que su independencia era la mejor garantia de su acierto. El señor Diputado dijo: La falibilidad de los jueces, no obstante las seguridades que se procuran en su carácter, no probaria nunca la infalibilidad de los demás poderes y si es forzoso que la ley se interprete, se entienda y se corrija; si era forzoso asegurar su verdadero sentido y aplicar su texto suscito y confuso las mas veces, preciso era tambien que algun poder se encargue de esta tarea, y si alguna vez los actos deliberados de algun alto poder se apartan de aquella Carta, que fué la cuna, y es la regla invariable de todos, cedan en buena hora las leyes generales que están por interpretarse el gran documento que ha interpretado ya el pueblo argentino.

Se dice que imitamos en todo á Norte-América y calcamos mal en nuestro alto Poder Judicial las mismas atribuciones que constituyen al Norte-Americano. A la verdad, si no copiamos ese no hallamos en el mundo un modelo para nuestros ensayos. La ley de los Estados-Unidos dá á su Justicia Federal las mismas atribuciones consignadas en el artículo que se discute. Nuestra Constitucion es la misma. No nos hemos arrepentido aún de ello. Preciso es que sancionemos el artículo en cuestion; y de no hacerlo, inútil es esta ley: inútil la seccion 3^a de nuestra Carta.

El señor Navarro: Que habia pedido la palabra para decir en breves razones que iba á votar en contra del artículo. Que habia pensado oponerse á él y tomar la palabra con este objeto; pero que los señores Diputados que habian hablado en oposicion á aquel, lo habian hecho tan luminosamente que nada habian dejado que decir. Que un señor Diputado acababa de decir, que la Justicia Federal como poder político y moderador ejercia una especie de veto sobre las leyes no conformes con la Constitucion. Que cabalmente ésta era

una de las razones porque votaria en contra de ese artículo, porque por él se daba disimuladamente la facultad del veto á las Cortes Federales, y mal podían éstas suspender bajo pretexto alguno el ejercicio y cumplimiento de una ley, cuando la Constitucion ni la naturaleza del poder que ella les atribuye les daba semejante facultad. Que por un principio de derecho *illius est tollere cuius est ponere*, solo tenia poder de quitar ó derogar, el que tenia el poder de crear ó establecer. Que el Congreso tenia la facultad de hacer las leyes, y solo él tenia derecho de suspenderlas y derogarlas. Que no queriendo dar á la Justicia Federal el poder absoluto de los Diez de Venecia, votaria en contra del artículo discutido.

El señor Ministro: Que habia pedido la palabra para hacer notar al señor Diputado que la atribucion que se impugnaba no concedia á la Justicia Federal el decreto de vetar las leyes, como él lo suponía; porque las resoluciones de aquellas jamás derogarian la ley, pues solo se le concedia en esa atribucion la libertad de no aplicarla en los casos particulares, cuando creyese que esa ley estaba en pugna con los principios establecidos por la Constitucion, porque siempre debia juzgar antes de toda ley con arreglo á aquellas, desde que solo eran leyes de la Confederacion las que fuesen completamente constitucionales. Que repetía, pues, que era indispensable conceder esa atribucion á la Justicia Federal para que un Juez no tuviera el derecho de decir: he cometido una inconstitucionalidad, porque la ley era inconstitucional.

Que respecto al principio de derecho *illius est tollere cuius est ponere*, que el señor Diputado habia interpretado en su favor, solo era aplicable cuando faltaba la ley, pero no en el caso presente en que aquella designa un poder que legisla, y otros que podía dejar de aplicar la ley que éste dictare cuando fuese inconstitucional.

El señor Navarro: Que le citase el señor Ministro alguna prescripcion de la Carta de Mayo, por la que se estableciese, que debia haber un poder en la Confederacion con las facultades que él (el señor Ministro) daba á las Cortes Federales, es decir, que tuviera, ajustándose al principio que habia citado, la facultad de quitar ó derogar lo que otro poder, el Legislativo, establecia.

El señor Ministro pidió se leyese el artículo 31 de la Constitucion, y leído que fué, expuso: que se habia dicho, aunque no tan expresamente, que la Constitucion era la única fuente de donde todos los poderes tomaban sus atribuciones: que el Congreso mismo no podía avanzar una linea mas allá de las que le demarca la Constitucion, porque éste era un círculo de fierro que no se podía romper,

y el señor Ministro dijo: Bien pues, si el Poder Judicial es el encargado de aplicar las leyes que sancionan los otros poderes conforme á la Constitucion (porque el artículo constitucional que acaba de leerse dice terminantemente: *que todos los poderes están obligados á conformarse á ella, no obstante cualquiera disposicion en contrario que contengan las leyes ó Constituciones Provinciales*). si esa Constitucion es la ley suprema del país, ¿con qué objeto se habia dado á la Justicia Federal la atribucion de *conocer y decidir en todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucion y las leyes de la Confederacion*? ¿Con qué objeto, señor, sino para que la Justicia Federal deje de aplicar las leyes que no estén conforme con aquella? ¿Cómo se quiere imponer á un poder igualmente que los otros el tormento de fallar con arreglo á

una ley que en su concepto es inconstitucional?

Observando algunos señores Diputados que debia darse por suficientemente discutido el artículo, el señor Araoz hizo mocion para que se suspendiese hasta la próxima sesion la resolucion de este asunto, fundándola en que era la hora avanzada, y algunos señores Diputados, como él mismo, que no habia tomado la palabra, deseaban hablar sobre este asunto.

Apoyada suficientemente esta mocion, se votó y fué aprobada é inmediatamente se levantó la sesion siendo las cuatro y cuarto de la tarde.

M. LUQUE.

Benjamin de Igarzabal,
Secretario.

22ª SESION ORDINARIA DEL 14 DE JULIO DE 1858

Presidencia del Sr. Luque

PRESIDENTE
RODRIGUEZ
DIAZ RODRIGUEZ
GARZON
GRAZ
FEIJOO
GARCIA
GORDILLO (D. V.)
GORDILLO (D. JOSÉ)
VALLE
GUTIERREZ
OCAMPO
FUNES
DURAN
LOPEZ (D. RICARDO)
DARACT
LUCERO
FERREIRA
ZUVIRIA
GONZALEZ
QUESADA
PARDO
COLODRERO
WARCALDE
CHENAUT
POSSE (D. F.)
ALVEAR
NAVARRO
LOPEZ (D. TIBURCIO)
SORIA

En el Paraná, Capital Provisoria de la Confederacion Argentina, á catorce días del mes de Julio de 1858, reunidos en su Sala de Sesiones los señores Diputados anotados al márgen con inasistencia de los señores Comas y Condarco con aviso, Victorica y Posse (Don Justiniano) sin él, el señor Presidente declaró abierta la sesion.

El Secretario dió cuenta de no estar concluída el acta de la anterior.

El señor Presidente expuso: que el señor Ministro de Relaciones Exteriores habia respondido que por hallarse en cama no podia asistir á la sesion presente para satisfacer la invitacion que se le habia hecho al objeto de que diese algunas explicaciones sobre la permanencia de una fuerza paraguaya en la «Tranquera de Loreto», territorio de Corrientes.

Instantaneamente continuó la discusion del artículo 2º de la ley de Justicia Federal, suspendida en la sesion anterior.

El señor Araoz dijo: Sirvase leer el señor Secretario el artículo que se discute y el 97 de la Constitucion, y leídos que fueron, continuó: Se vé que la oposicion hecha al artículo en discusion consiste en que á juicio de los opositores se confiere á la Corte Suprema una atribucion que, ó no la tiene por la Carta, ó que no debe dársele porque no conviene, es decir, que esa oposicion se reduce á impugnar la última parte del artículo que prescribe que la Justicia Federal procederá con arreglo á la Constitucion y las leyes nacionales que estén en conformidad con ella. La cuestion, pues, viene á reducirse simplemente á si la Corte Suprema tiene ó debe tener ó no la atribucion que quiere conferírsele, es decir, si puede interpretar ó no las leyes y la Constitucion cuando las primeras ofrecen duda.

Si es cierto que la Corte Suprema es la única autoridad, el único Tribunal que puede interpretar las leyes, es lógico, señor, que debe tener la atribucion que se le confiere por el artículo, es decir, que ella entonces podrá ó no podrá, segun el juicio que forme, aplicar ó no las leyes que dicte el Congreso; es decir, interpretarlas, examinarlas y aplicarlas en los casos particulares, ó desentenderse de ellas cuando crean que se oponen á las prescripciones de la Constitucion, y aplicar estas en vez de aquellas.

Como se vé por el artículo 97 leído, en el